

ECUADOR Debate₁₀₅

Quito/Ecuador/Diciembre 2018

Devenires actuales de los extractivismos

Avanzamos hacia el pasado

Conflictividad socio política:
Julio-Octubre 2018

Nuevas coyunturas entre extractivismos
y desarrollo

Nuevo extractivismo energético en
América Latina

El aparato del desarrollo en las políticas
agrarias progresistas

Extractivismos y derechos: el uso de las
Evaluaciones del Impacto de los
Derechos Humanos

El pueblo Harakbut, frente a los
extractivismos en la Amazonia del Sur
de Perú

Vaivenes de las relaciones de las
comunidades con emprendimientos
extractivistas

Transformaciones agrarias y jóvenes
rurales

Las Matrices de insumo producto
desde una perspectiva clásica

Regionalismo nacionalista. El conflicto
por la explotación del salar de Uyuni en
1989



ECUADOR **Debate**

CONSEJO EDITORIAL

José Sánchez-Parga (+), Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira,
Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga (+),
Fredy Rivera Vélez, Marco Romero.

Director: Francisco Rhon Dávila. Director Ejecutivo del CAAP
Primer Director: José Sánchez Parga. 1982-1991
Editor: Hernán Ibarra Crespo
Asistente General: Margarita Guachamín

REVISTA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS SOCIALES

Publicación periódica que aparece tres veces al año. Los artículos y estudios impresos son canalizados a través de la Dirección y de los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones, comentarios y análisis expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE.

© ECUADOR DEBATE. CENTRO ANDINO DE ACCION POPULAR
Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$. 51

ECUADOR: US\$. 21

EJEMPLAR SUELTO EXTERIOR: US\$. 17

EJEMPLAR SUELTO ECUADOR: US\$. 7

ECUADOR DEBATE

Apartado Aéreo 17-15-173B, Quito-Ecuador

Telf: 2522763 . Fax: (5932) 2568452

E-mail: caaporg.ec@uio.satnet.net

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito.

PORTADA

Gisela Calderón/Magenta

ARMADO E IMPRESIÓN

Edwin Navarrete, Taller de Diseño Gráfico

ISSN: 2528-7761

ISBN número 105: 978-9942-963-45-1



ECUADOR DEBATE 105

Quito-Ecuador • Diciembre 2018

ISSN 2528-7761 / ISBN 978-9942-963-45-1

PRESENTACIÓN	3/6
COYUNTURA	
• Avanzamos hacia el pasado	7/16
• Conflictividad socio política: Julio-Octubre 2018	17/21
TEMA CENTRAL	
• Nuevas coyunturas entre extractivismos y desarrollo. Los límites del concepto de populismo y la deriva autoritaria <i>Eduardo Gudynas</i>	23/45
• Nuevo extractivismo energético en América Latina <i>Gerardo Honty</i>	47/67
• El aparato del desarrollo en las políticas agrarias progresistas. Una crítica desde el postdesarrollo a las políticas públicas de los gobiernos Correa en Ecuador y Mujica en Uruguay <i>Tamara Artacker</i>	69/90
• Extractivismos y derechos: el uso de las Evaluaciones del Impacto de los Derechos Humanos <i>Malayna Raftopoulos</i>	91/108
• El pueblo Harakbut frente a los extractivismos en la Amazonia del Sur de Perú <i>Andrea Cardoso</i>	109/124
• Vaivenes de las relaciones de las comunidades con emprendimientos extractivistas: Los casos argentinos de Mendoza y San Juan ante la megaminería <i>Lucrecia Wagner</i>	125/142
DEBATE AGRARIO-RURAL	
• Transformaciones agrarias y jóvenes rurales <i>Lama Al Ibrahim</i>	143/155

ANALISIS

- Las Matrices de insumo producto desde una perspectiva clásica.
Un aporte al estudio de la economía territorial a partir del trabajo
de Piero Sraffa 157/180
Leonard Field
- Regionalismo nacionalista. El conflicto por la explotación
del salar de Uyuni en 1989 181/197
Franz Flores Castro

RESEÑAS

- Los actores y la producción de la democracia y la política en Ecuador
1979-2011. 199/202
- La cuestión agraria y los gobiernos de izquierda en América Latina.
Campesinos, agronegocio y neodesarrollismo 203/205

Regionalismo nacionalista

El conflicto por la explotación del Salar de Uyuni en 1989

Franz Flores Castro*

Este trabajo estudia un conflicto de carácter regionalista ocurrido en 1989, en el departamento de Potosí, a raíz de la negativa de la región para que la transnacional Litchco explote el litio del salar de Uyuni. Este caso muestra que, en un contexto de transformación neoliberal del Estado, la lucha en torno al clivaje Estado-mercado se desplaza del plano sindical al cívico, y de la lucha ideológica y partidaria a la lucha territorial. Los actores sindicales y de izquierda, se insertaron en una institución regionalista como el Comité Cívico Potosinista, para bloquear la llegada de capitales extranjeros al salar de Uyuni, que era uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno del MIR-ADN (1989-1993).

Introducción

En 1989, en el departamento minero de Potosí, y en pleno despliegue del modelo neoliberal, se produjo un conflicto de connotaciones regionalistas pero; con objetivos nacionalistas. La raíz del problema surgió por la negativa de las instituciones de la sociedad civil local de aceptar la llegada de la empresa Lithium Corporation para explotar el litio contenido en el salar de Uyuni, ubicado al sur de Potosí, en la frontera con Chile. Este conflicto abrió una oportunidad política, para las fuerzas sindicales y de izquierda, de generar oposición al neoliberalismo e imponer sus ideas nacionalistas. Como resultado, el gobierno de entonces, encabezado por Jaime Paz, se vio obligado a anular el contrato con la Litchco, aceptando así las demandas del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), dirigido en ese momento, por representantes sindicales y de izquierda.

En la primera parte, ofrezco un acercamiento al concepto de clivaje, presentando sus principales características y el rol que juegan los actores políticos en su activación; en la segunda parte, expongo el conflicto regionalista de la lucha por los recursos del salar de Uyuni en el departamento de Potosí, analizando cómo las fuerzas sindicales y de izquierda, que pasaban por un momento de debilidad política, asumen el mando de la entidad cívica COMCIPO y activan el clivaje territorial.

* Docente de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca-Bolivia, candidato a Doctor en Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos por FLACSO sede Ecuador.

Algunos elementos teóricos sobre clivajes

Un clivaje se define como una división estructural que se presenta en la vida social, en torno a la cual los actores construyen una identidad que organiza, por largo plazo, la competencia y disputa política. No todas las divisiones sociales se convierten en un clivaje; se hace necesario que los actores construyan discursos y organizaciones alrededor de la escisión. Como señala Kriesi, “una división estructural se transforma en clivaje cuando los actores dan coherencia y expresión política organizada a lo que, de otra manera, serían creencias, valores y experiencias incompletas y fragmentarias entre algunos miembros de los grupo sociales” (Kriesi, 1998: 167). Hay dos elementos adicionales del concepto: manifiesta líneas de contraste y escisión de gran alcance (religiosas, territoriales, económicas, ideológicas), en las cuales se ven involucrados amplios grupos sociales, en una determinada dinámica de conflicto. Por otro lado, son persistentes en el tiempo, de tal manera que definen patrones de conducta más o menos constantes, tanto formales como informales (Zukerman en Burbano 2014: 12).

Metodológicamente, se trata de un caso de estudio:¹ el conflicto territorial en el departamento de Potosí en 1989 motivado por el ingreso de la transnacional Licthco en territorio boliviano para explotar el litio del salar de Uyuni. Sostengo que, a través del mismo, podemos ver cómo los actores en conflicto pueden activar el regionalismo que es un clivaje que tiene que ver con la relación centro periferia, para continuar actuando en torno al clivaje Estado-mercado.

Para demostrar mi hipótesis opero de la siguiente manera: en primera instancia, demuestro la existencia del clivaje estado-mercado y su presencia a lo largo de la historia boliviana. Rastreo su emergencia tomando en cuenta: a) la división visible que permite separar a los actores sobre características objetivas; b) conciencia identitaria fundada sobre dichas diferencias y que motiva la acción y movilización; y c) las organizaciones constituidas en torno al conflicto y que lo institucionalizan (Bartolini y Mair en Torres 2016: 101). Esto, supone un acercamiento histórico diacrónico que muestre la estructura de definiciones, al inicio del nacimiento del estado nación y, la estructura de cambios y permanencias del clivaje hasta nuestros días.

Una vez demostrada la existencia del clivaje nacionalista e identificado a uno de sus principales actores, el proletariado minero, pasó a demostrar cómo este actor nucleado en la Central Obrera Departamental (COB), imprime su orientación a las distintas instituciones territoriales potosinas que se crean desde 1955. Demuestro que, en una institución como COMCIPO que, en teoría debería operar en base al clivaje regionalista, en realidad lo hace en torno al clivaje Estado-mercado, puesto

1. Un estudio de caso puede entenderse como el estudio intensivo de un caso particular, con el propósito –al menos parcial– de echar luz sobre un conjunto más amplio de casos (Gerring en Giménez 2012: 44).

que el principal actor de la periferia potosina, la Central Obrera Departamental, termina por orientar el curso y naturaleza de sus demandas y acciones.

El clivaje nacionalista (1825-1985)

Uno de los clivajes que estructura la división política al interior de la sociedad boliviana es el clivaje Estado-mercado que ya apareció en la constitución del Estado republicano. En efecto, Bolivia nació en 1825 con la minería como principal actividad económica, alrededor de la cual se organizaron empresas e intereses económicos distintos. Por un lado, estaba la corriente proteccionista compuesta por pequeños mineros, gremios de artesanos y comerciantes, articulados a los mercados regionales, ligados a la producción de plata de Potosí; por otro, la corriente librecambista integrada por grandes mineros y comerciantes (Mitre, 1981).

La disputa, entre ambas corrientes, tenía que ver con el hecho de que la nueva república había mantenido el monopolio del Estado, en la compra de pastas de plata y la mantención de la moneda feble que afectaba grandemente a los empresarios mineros puesto que, por una parte, el precio establecido por el Estado era más bajo que del mercado y, por otro, el pago era en moneda feble, devaluada. Se calculan que estas disposiciones representaban un impuesto indirecto de 28% sobre las ganancias (Mitre, 1981). Para los proteccionistas, en cambio, estas normativas servían para garantizar los mercados nacionales y asegurar la disponibilidad de circulante monetario.

Dado el crecimiento del poder económico y político de los empresarios de la plata, esta situación no pudo mantenerse; finalmente, en 1872, se decreta libre el comercio de pastas y minerales de plata y se suprime la moneda feble, lo que naturalmente implicó la ruina de productores agrícolas y de artesanías, tanto como la falta de circulante monetario (Mitre, 1981: 45; Platt, 2016: 108).

Posteriormente, se impulsó la vigencia de un sistema de partidos con dos corrientes como la liberal y la conservadora, sin grandes diferencias ideológicas, puesto que ambas eran tributarias del libre mercado.

El partido conservador, estuvo en el poder entre 1884 y 1899 y su dominio terminó a fines del Siglo XIX, cuando una guerra civil culmina con el partido liberal en el poder y coloca a la ciudad de La Paz, como sede de gobierno. Un nuevo grupo de empresarios mineros, ligados a la explotación del estaño asumieron el proyecto de modernización liberal. El poder, los mineros del estaño era determinante puesto que, tenían en sus manos, cerca del 60% de las exportaciones de Bolivia y, a través de sus bancos, podían manejar el sistema financiero y monetario nacional, tanto que ellos otorgaban préstamos al Estado (Malloy, 1989: 63).

Junto a los cambios en la estructura productiva extractiva, apareció el proletariado minero así como una nueva clase media urbana, compuesta por artesanos, comerciantes, y un considerable ejército de burócratas y personal técnico ligado a las telecomunicaciones y los ferrocarriles (Lorini, 1994: 68-69; García, 2014). A

partir de 1916, se organizan en asociaciones y mutuales de artesanos y obreros, dando vida a un grupo social que sería determinante en la vida política posterior, puesto que pondrían nuevamente en la agenda pública el rol del Estado en la economía y sociedad.

Todo esto, da una nueva dinámica a la política a partir de la década de 1920: los gobiernos ya no pueden imponer su voluntad tan fácilmente como lo hacían en el pasado (a pesar de importantes concesiones a las demandas emergentes). A esto se suma la grave crisis económica que repercute en la estabilidad gubernamental y que radicaliza los discursos y las acciones políticas. En este contexto, el presidente Salamanca, que consideraba que el problema de Bolivia era el radicalismo y el comunismo, en 1931 declara la guerra a Paraguay, en un intento por reencauzar la política boliviana bajo los viejos moldes liberales. Sin embargo, esta guerra que segó la vida de 50.000 soldados, no hizo otra cosa que fortalecer a las nuevas corrientes nacionalistas.

Los gobiernos posteriores a la guerra del Chaco son muestras del juego político alrededor del clivaje nacionalista y de clase. El gobierno de David Toro (1936-1937), confiscó la *Gulf Oil* y decretó la obligación a las empresas mineras de entregar sus divisas al Banco Central; por su parte, el gobierno de Germán Busch (1937-1939), llamó a una Convención constituyente en 1938, que redefinió el rol del Estado frente a la sociedad y colocó a Bolivia frente a un horizonte pos oligárquico que marcó el fin del ciclo histórico del liberalismo (Burbano de Lara, 2014: 65).

En este contexto, favorable a la circulación de ideas nacionalistas y de izquierda, se crearon partidos que serán determinantes en la política posterior. En 1941 se fundó el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que postuló “el fortalecimiento del Estado que asegure en beneficio del país la riqueza proveniente de la industria extractiva y su acción para formar la pequeña industria” (MNR en Arze, 2015: 447). Al mismo tiempo apareció el Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR) que propuso la nacionalización de la industria minera, del petróleo y de los ferrocarriles, el monopolio del comercio exterior por el Estado, el control fiscal del comercio interno y una reforma agraria orientada a liquidar el latifundio feudal (PIR en Idem: 441).

El partido que se ubicó a la derecha del espectro ideológico fue Falange Socialista Boliviana (FSB); creado bajo el modelo de la Falange española, su acendrado anticomunismo hará de este partido el baluarte de las fuerzas de extrema derecha del país y, en algunos casos, su fuerza de choque.

La revolución de 1952 y las luchas alrededor del clivaje Estado-mercado

En abril de 1952, de la mano del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se produce una revolución que sepulta el viejo orden liberal. Tanto la nacionalización de las minas, como la reforma agraria ejecutadas por el nuevo gobierno,

expresan el cumplimiento de una agenda que se había delineado casi treinta años atrás y la fuerza alcanzada por los nuevos movimientos. Las corrientes políticas se alinearon de la siguiente manera: una tendencia radical y de izquierda dirigida por la Central Obrera Boliviana (COB), que impulsó los principales cambios hacia un mayor control estatal de la economía; una tendencia de centro derecha que, posicionada en los principales cargos gubernamentales, buscó adecuar el ritmo y la profundidad de los cambios a su proyecto de diversificación y modernización económica; y, una tendencia de derecha que buscó potenciar el rol de la empresa privada y de la inversión extranjera en la economía (Malloy, 1989).

El golpe de René Barrientos Ortuño de 1964, marca el fin del MNR en el gobierno. Muestra el grado de poder alcanzado por los militares, la influencia de los Estados Unidos en los asuntos internos del país y la pérdida de popularidad del MNR. Aunque con breves interregnos (Ovando, Torres), las más de dos décadas de los militares en el poder muestra el poder de las fuerzas a favor del libremercado y la inversión extranjera: en este periodo se procedió a la privatización de importantes minas estatales, se entregaron ricos reservorios mineros y se aplicó el código Davenport, base legal para la llegada de los capitales extranjeros a la explotación hidrocarburífera. Paralelamente, se procedió a un control de los sindicatos mineros en base a represión y militarización de las zonas mineras (Dunkerley, 1987).

En 1982, el ciclo de gobiernos militares llegó a su fin, con la posesión de Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora como presidente y vicepresidente de la República respectivamente. Su principal tarea consistía en solucionar la agobiante crisis económica y hacerlo, dentro de los marcos de las reglas de la democracia representativa que daba sus primeros pasos. Sin embargo, ninguna medida aplicada tuvo efectividad,² lo que mostraba la imposibilidad de continuar con el modelo de Estado, de sociedad y de un tipo de relación entre ambos, dentro de los marcos generados por la matriz de Estado de 1952 (Lazarte, 1992: 4).

En estas condiciones, tanto las organizaciones políticas como sociales promovieron en 1984, un adelanto de las elecciones que se verificó un año después. En las elecciones de 1985 ganó Acción Democrática Nacionalista, el partido del General Banzer con el 28,5% de los votos; seguido del MNR con el 26,4% y del MIR con el 8,8% (Romero, 1999: 27). En la otra vereda, la izquierda agrupada en torno al Frente Popular Unido (FPU) alcanzó un 2,2% de los votos, lo que habla de la crisis política, ideológica y de liderazgo por la que atravesaba el conjunto de la izquierda boliviana (Romero, 1998: 30).

Con este respaldo, en agosto de 1985 Víctor Paz, a la cabeza del nuevo Gobierno, anunció un paquete de medidas económicas destinadas a frenar la hiperinflación y poner en marcha un nuevo modelo de estado neoliberal. En un contexto

2. El índice de precios al consumidor pasó de 295 en 1982 a 1.815.919 en 1985; la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto fue negativa en todo el periodo: -3,9 en 1982 a -1,7 en 1985 y, por último, la tasa de desempleo subió de 10% en 1982 a 18% en 1985 (Morales, 2012: 34).

de crisis del discurso del nacionalismo revolucionario, la propuesta económica de partidos políticos como MNR, ADN y MIR se centró en la vigencia de una economía de mercado como factor determinante para la eficiencia económica, el desarrollo equilibrado y la modernidad.

Los mineros y su influencia en la región potosina

En 1992, Potosí ocupaba el sexto puesto en el ranking de densidad estatal,³ (DE) por debajo de departamentos como Santa Cruz (1), Tarija (2), Cochabamba (3), La Paz (4) y Beni (5). Entre 1949 y 1992, el Estado había abandonado paulatinamente a Potosí para dirigir su presencia, en tanto servicios de salud, educación, salubridad, a otros departamentos, sobre todo, a aquellos denominados del “eje” como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. (Just, 2017: 16).

Los potosinos no estuvieron impasibles ante esta realidad; de hecho, desde 1952 habían reclamado atención del gobierno del MNR que para Potosí solo había proyectado la construcción de cuatro escuelas, la reconstrucción del templo de San Lorenzo, la construcción de un comedor para los Kajchas (cooperativistas mineros), la edificación de un cine popular y la reparación del estadio Sucre (La Nación, 8.12.1953).

Por ello, entre 1955 y 1977, se intentó la conformación de varias instituciones territoriales para reclamar por la región potosina:

Cuadro 1. **Comités cívicos de Potosí (1955-1976)**

Año	Nombre	Objetivos	Principales actores al momento de su creación
1955	Comité cívico “Ad hoc”	Sentar las bases para la constitución de un Comité Cívico	Notables de la ciudad de Potosí, Federación Universitaria Local, Falange Socialista Boliviana.
1959	Comité de defensa de los intereses de Potosí (CODEIPO)	Oposición a la reducción de personal en la empresa minera EMUCP, creación de fuentes de trabajo, hornos de fundición, fomento a la producción de trigo, caprinos y ovinos	Control Obrero de la EMUCP, la Central Obrera departamental y personajes profesionales de la clase media
1969	Unión Cívica Potosinista	Construcción de una planta de fundición de Zinc	Profesionales de clase media, y empresarios
1975	Comité Cívico Femenino de Potosí	Fundición de zinc, vinculación caminera, construcción de centros de salud y construcción de un aeropuerto.	Integrantes de Clubes del libro y de cofradías religiosas.

3. La Densidad del Estado puede ser concebida como los desempeños o funcionamientos del Estado para garantizar la provisión de los requerimientos sociales y los servicios básicos, directa o indirectamente, a todos los sectores de la sociedad y en todos los lugares de un país, de manera subsidiaria y redistributiva (Informe de Desarrollo Humano de Perú, 2009: 14)

1976	Comité Cívico Potosinista (COMCIPO)	planta de fundición de Zinc, urbanización de Tarapaya, fábrica de cemento, nuevo Estadio departamental, Casa de la cultura, camino Potosí-Uyuni y Potosí – Villazón, canalización de aguas del río San Juan y aprovechamiento de los recursos naturales	Colegios de profesionales, instituciones vecinales y empresa privada.
------	-------------------------------------	---	---

Fuente: Periódicos *Trinchera*, *En Marcha*, *El Siglo*, elaboración propia.

Un rasgo importante de todas estas organizaciones cívicas es la fuerte presencia de los sindicatos. Potosí albergó a una fuerza sindical minera importante,⁴ determinante en la política regional. Esto hace que si bien las entidades cívicas fueron conformadas para defender los intereses de todos, sin exclusiones políticas ni de partido, notablemente terminaron por vehiculizar los intereses de la clase trabajadora minera.⁵ Carlos Derpic, un abogado de militancia izquierdista y expresidente de COMCIPO señala:

siempre el comité cívico se caracterizó por estar a la izquierda, siempre, no era como el de Santa Cruz que estaba a la derecha, lo que se debe a la fuerte presencia de los mineros que incluía en todo esto; por ejemplo si usted ve las relaciones COD- COMCIPO, de primera, relaciones cordiales, fraternidad, hermandad, en cambio en Santa Cruz eran de pelea (Entrevista).

De todas maneras, cabe precisar que la presencia obrera en COMCIPO, aparece en momentos en que el sindicalismo minero necesita dotar de mayor respaldo a sus acciones. Los obreros instrumentalizan COMCIPO para defender sus intereses. Esto se presentó ya en 1959, cuando la Central Obrera Departamental (COD) funda CODEIPO, con el fin de detener despidos de trabajadores en la COMIBOL; de manera similar, en 1979, los obreros asumen la dirección de COMCIPO con Paulino Palma del Sindicato central de metalúrgicos, acompañado de Gonzalo Valda,

-
4. Los sindicatos mineros tuvieron su base geográfica fundamentalmente en las minas ubicadas en el departamento de Potosí. De los yacimientos de la mina Catavi ubicada en el municipio de Llallagua y la Mina Pailaviri ubicada en el Cerro Rico de la ciudad de Potosí o de la mina Chorolque ubicada en Tupiza, salía más del 60% de la producción nacional de estaño (Cf Bedregal, 1959) y acogieron a una buena parte del proletariado minero. De estos centros mineros salieron dirigentes históricos como Juan Lechín Oquendo y Filemón Escobar o Simón Reyes. Sin estas minas hubiera sido imposible que los “barones del estaño” como Simón I. Patiño y Mauricio Hirschfeld o Carlos Víctor Aramayo llegaran a tener el poder económico y político del que gozaron en la primera mitad del Siglo XX.
 5. Esto se da porque la Central Obrera Departamental (COD) puede articular a una diversidad de organizaciones como la Federación de Choferes, las Juntas vecinales, gremialistas, cooperativas mineras, magisterio urbano, ferroviarios y Federación Universitaria Local (FUL), mismas que, por su cantidad de afiliados, llegan a ser mayoría en el Consejo Consultivo de COMCIPO, máxima instancia de decisión. A esto se debe añadir que la COD tiene cercanía con profesionales de la clase media que militan en partidos de izquierda quienes, finalmente, terminan formando parte de la directiva de COMCIPO.

como representante del colegio de economistas. Valda era un importante dirigente del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) para resistir la posibilidad de un golpe de Estado (*El Siglo*, 20. 10-1979). Asimismo, en junio de 1986, después de que el gobierno de Víctor Paz dispusiera el cierre definitivo de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), toman la dirección de COMCIPO el abogado Luis Fernández Fagalde (militante del Movimiento Bolivia Libre), acompañado de los dirigentes mineros Jacinto Velásquez y Alberto Choque de la Empresa Minera Unificada del Cerro de Potosí (EMUCP), para detener el despido de más de 10.000 trabajadores mineros (*El Siglo*, 30.05.86).

Pese a esto, la legitimidad del movimiento cívico no decayó, lo demuestra el permanente respaldo de la ciudadanía a sus convocatorias y movilizaciones. Entre la ciudadanía siempre existió un sentimiento de postergación y agravio por no recibir atención conforme a lo que Potosí daba a las arcas del Estado. Como señala Facundo Gómez un expresidente de COMCIPO

la gente criticaba la postergación de Potosí porque, ni en los anteriores gobiernos realmente se han preocupado por solucionar los problemas acuciantes de Potosí, como son por ejemplo el tan elemental problema del agua; no se preocuparon por su vertebración caminera, a nadie le importó que Potosí tenga o no ruta asfaltada siendo el departamento que más divisas generó y más contribuyó al Tesoro general de la nación en épocas pasadas (Gómez en Íñiguez 2008: 41).

La periferia potosina contra las transnacionales, el regionalismo nacionalista en acción

El 7 de mayo de 1989, se realizan las elecciones presidenciales que revelaron el respaldo de la ciudadanía a los partidos que impulsaban el nuevo modelo económico. Los resultados en el departamento de Potosí fueron:

Cuadro 2. Elecciones presidenciales 1989. Resultados en el departamento de Potosí

Partido político	Porcentaje de votos	Escaños parlamentarios	
		Senadores	Diputados
MIR	26,38	2	5
MNR	24,46	1	5
ADN	23,46		3
IU	15,49		1
PS1	3,68		1
MRTKL	1,90		
CONDEPA	1,72		

Fuente: Corte Nacional Electoral 1989, elaboración propia.

Esto implicaba que, pese a la oposición que habían desplegado las fuerzas sindicales y de izquierda en contra el modelo neoliberal, la posición mayoritaria de la ciudadanía era el avanzar en torno a la estabilidad y las reformas económicas.

En este contexto desfavorable, las fuerzas sindicales desplazaron su campo de lucha tradicional y la llevaron al espacio cívico. Para ello, asumieron la dirección de COMCIPO; su fórmula encabezada por Facundo Gomez (un profesional ligado a las corrientes de izquierda), junto a los dirigentes Gervasio Ramos y Jacinto Flores de la COD, ganó las elecciones de esta entidad.

En agosto de 1989, COMCIPO convocó a un Cabildo abierto donde los parlamentarios se comprometieron a trabajar por el desarrollo regional. A este acto también asistió el vicepresidente de la república Luis Ossio Sanjinez, un político potosino de amplia trayectoria. Este cabildo, significó el tácito reconocimiento de los partidos políticos a COMCIPO como la instancia que recoge y canaliza las demandas de la región. En otras palabras, los partidos abrieron todas las posibilidades para que esta entidad cívica, actuara contra las políticas del gobierno bajo el discurso de que lo hacía: en defensa de los intereses regionales.

Dada la composición de la directiva de COMCIPO no es extraño que el pliego de peticiones se haya elaborado alrededor de la defensa del rol del Estado en la economía. Si bien el documento contenía una larga lista de pedidos al gobierno como apoyo a la agricultura; vertebración caminera; electrificación rural; construcción del acueducto del río San Juan; hospital Daniel Bracamonte; construcción segunda fase del aeropuerto; cambio del sistema de percepción de regalías mineras; funcionamiento permanente de Karachipampa, etcétera. También estaban, asuntos como la defensa intransigente de los recursos naturales, como el Cerro Rico y el Salar de Uyuni, y la reversión de las utilidades obtenidas en la explotación de recursos naturales (*El Siglo*, 4.05.89).

Estos aspectos, pero sobre todo, el de la “defensa intransigente de los recursos naturales” o la reversión de las utilidades, podía dar lugar a una diversidad de lecturas. No es difícil adivinar que, para la izquierdista directiva de COMCIPO, esto significaba oposición al ingreso de capitales privados y extranjeros a territorio potosino y defensa del rol del Estado en la economía. Filemón Escóbar, un veterano dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y, en ese momento, único diputado por Izquierda Unida, fue claro al señalar en el cabildo que “fundamentalmente hay que reactivar el aparato productivo del departamento que corresponde al sector estatal de la economía” (*El Siglo*, 14.08.89).

Estos objetivos de COMCIPO estaban contra el perfil que, en el plano económico, trató de dar a su gestión el Gobierno del MIR-ADN (1989-1993). El presidente Jaime Paz Zamora buscó ser el promotor de la privatización de las empresas públicas e impulsor de la inversión extranjera. Paz Zamora, sostuvo que “había que privatizar el Estado para agrandar la nación”. En el caso de Potosí esto significó el impulso al proyecto de industrialización del Salar de Uyuni, la más importante reserva de litio del mundo.

El salar de Uyuni es el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo, con una superficie de 10.582 km². Está situado a unos 3.650 msnm en el suroeste de Bolivia, en la provincia de Daniel Campos, en el departamento de Potosí, dentro

de la región altiplánica de la Cordillera de los Andes. El salar de Uyuni contiene el 50-70% del litio mundial, e igualmente cuenta con importantes cantidades de potasio, boro y magnesio. En la década de los 90 se hizo apetecible el litio, puesto que es usado en aparatos como teléfonos móviles, relojes, agendas electrónicas, ordenadores portátiles y lectores de música.

En noviembre de 1989, el gobierno dio a conocer la noticia del interés de la empresa transnacional *Lithium Corporation* para explotar los recursos evaporíticos del salar de Uyuni. El ministro de minería, Walter Soriano Lea Plaza, informa que el gobierno ha adelantado la firma de un borrador de contrato donde se especifica que el país recibiría el 51% de las utilidades y la empresa realizaría una inversión de 40 millones de dólares, de los cuales 6 millones irían a la exploración y explotación y el restante, 34 millones de dólares, para el montaje de una planta de procesamiento de carbonato de litio (Idem 29.11.89).

A mediados de enero de 1990 el borrador de contrato con la *Lithco* cobró centralidad en la agenda pública del departamento. Un seminario convocado por COMCIPO concluyó apoyando la necesidad de aprovechar los recursos del salar de Uyuni, empero, se exigió transparencia respecto de los detalles del contrato y una consulta permanente con la entidad cívica. Al finalizar la reunión Facundo Gómez el presidente de COMCIPO señaló:

(...) para estar convencidos de que el contrato es bueno tenemos que terminar de analizarlo en sus aspectos jurídico, técnico, económico y social; pero, cualquier contrato de inversión que se firme ahora y en el futuro para explotar nuestros recursos debe necesariamente favorecer al departamento y a la nación, es decir a los legítimos dueños de los recursos que se van aprovechar (*El Siglo*, 15.01.90).

Esta declaración si bien era de apertura a la posibilidad de explotación, preanunciaba el tema central del conflicto que era: ponerse de acuerdo en una ecuación donde los términos del contrato sean completamente favorables “al departamento y a la nación”, sin que eso ahuyentara la inversión extranjera. Como veremos, esos equilibrios eran sumamente frágiles y difíciles de conseguir, ya que ni el país estaba en la capacidad de imponer sus condiciones a una empresa como la *Lithco* (que controlaba el 90% del mercado mundial del litio), ni se podía acordar un contrato totalmente positivo a los ojos de la dirigencia cívica, dominada por los actores sindicales y de izquierda.

En días posteriores, COMCIPO convocó a reuniones donde consultó con sectores interesados respecto de los términos del contrato. En estas reuniones se dieron distintas versiones sobre las potencialidades del litio y las características del contrato, algunas de ellas mesuradas y realistas y otras, las más, desmesuradas, tanto sobre la riqueza que contiene el salar como por las utilidades que obtendría la *Lithco*. Por ejemplo, la Federación de Cooperativas mineras señaló, basada en un supuesto estudio, que la transnacional obtendría una utilidad bruta de 20 billones de dólares en 40 años de exportación de litio metálico, es decir 50 millones de

dólares por año, lo que era una inmensa ganancia comparada con los 40 millones de inversión que proyectaba realizar en 10 años.

Este tipo de versiones no hacían otra cosa que ratificar en el imaginario colectivo, que el salar contenía tanta riqueza como el Cerro de Potosí y que, con un contrato mal elaborado, se corría el riesgo que la historia de una explotación sin retribución se repita, que no quede nada para el departamento, una vez que la empresa extranjera termine de aprovechar sus riquezas. Cundió el temor que el litio solo sirviera para el enriquecimiento de extranjeros y de otras regiones, pero nunca para Potosí. Un reportaje del periódico *El Siglo* publicado al inicio del conflicto señalaba,

el mundo, por no decir las grandes potencias *se disputan* ese incalculable caudal de materia prima para mil usos que precisa la tecnología moderna, el departamento de Potosí y Bolivia toda, reflexionan que *la historia con extraña obsesión se repite*, primero fue la plata de Cerro Rico, la que alimentó las economías monárquicas de la vieja Europa, luego surgió el estaño –el metal del diablo– que originó imperios económicos dentro y fuera de nuestro generoso territorio. ¿El litio será tal vez el nuevo metal del diablo en las próximas décadas? Se pregunta el hombre común (13.02.1990 resaltado nuestro).

Este discurso tuvo una gran capacidad de resonancia en la población potosina, se lo reproduce desde décadas atrás y, si bien no nace con la revolución nacionalista de 1952, es la que en definitiva le da contenido y fuerza. Es el mito del Cerro siempre rico e inagotable (Francovich, 1980),⁶ codiciado por los extranjeros, lo que hace que cualquier tipo de empresa privada, peor una extranjera, no goce de la mínima confianza. Un manifiesto de COMCIPO recoge claramente cada uno de los términos de este discurso:

A partir de 1545 se dio inicio a una época histórica marcada por el sistemático saqueo de los recursos naturales, primero fueron los españoles en la colonia y en la república con la plata y el estaño que sirvieron para hacer ricos a unos cuantos empresarios dedicados a la minería en desmedro de los derechos del país y los hijos de esta tierra. En la hora actual son otras empresas como COMSUR, COMCO; EMUSA; Bernal, Andacaba, San Juan y otras que se aprovechan de las riquezas de Potosí. *Es la historia de la explotación sin retribución*. Para colmo de males se pretende ahora entregar el salar de Uyuni a una empresa transnacional y es que dicha entrega se quiere realizar al interior del modelo que privilegia la inversión extranjera sin medir las consecuencias que ella supone" (*El Siglo*, 15,03.1990, resaltado nuestro).

6. Dice Guillermo Francovich "El cerro de Potosí representó el mito del enriquecimiento rápido, de las fortunas alcanzadas como un regalo por quienes se llegaban a él. El mito de Potosí pasó a ser, de ese modo el equivalente de los viejos mitos referentes a países fabulosos, como las Islas Afortunadas, el país de Ofir o la isla de Ceylán, cuyos campos, según el Ramayana, estaban espolvoreados de oro y que Brahma regaló a Kuvera el Dios de las riquezas" (Francovich 1980: 72).

La identidad regionalista potosina es tributaria de la idea de que el departamento, pese a que dio todas sus riquezas al estado central, no recibió a cambio más que olvido y postergación. Esta postura, ciertamente movilizadora, puede tener varias consecuencias, una de ellas es presionar sobre el Estado para que acometa proyectos de desarrollo y modernidad a través de mayores recursos y presencia estatal; pero también puede derivar en una postura nacionalista, donde la región se pone en defensa de los recursos naturales, en contra de la “voracidad de las transnacionales” y por tanto, contra el gobierno que la fomenta. Esto es justamente lo que ocurrió.

Para la dirigencia de COMCIPO, la presencia probable de la transnacional *Lithco*, en territorio potosino, no era más que la reproducción de la lógica saqueadora de los extranjeros, que nace en la colonia, que pervive en la república, y que continua con las empresas como COMSUR y EMUSA. Por tanto, levantar la mayor cantidad de obstáculos para que ingrese la transnacional era defender la región, para que Potosí no sea, nuevamente, objeto de engaño y sus recursos no sirvan al extranjero.

Este conflicto, por tanto, se montó sobre una fuerte idea regionalista y generó una adhesión militante de la población potosina, quizá como nunca había pasado antes. Sin embargo, la misma, no derivó en una mejora de las condiciones del contrato, sino en una anulación del mismo que era, en realidad, lo que buscaba la dirigencia cívica.

Que la *Lithco* sea una empresa norteamericana; que se considerara al Salar como “el Cerro rico del siglo XXI”, junto a una gestión deficiente y poco clara del proceso de licitación por parte del Gobierno, generó un coctel explosivo que derivó en uno de los mayores conflictos entre el gobierno del MIR-ADN y la región potosina.

A inicios de enero de 1990 la posición de COMCIPO derivó en pedir una licitación internacional para la explotación del salar, con la intención, se dijo, de mejorar las condiciones de un contrato que era desfavorable a los intereses del departamento y del país.

La respuesta del Gobierno fue que la solicitud solo retrasaba el inicio del contrato. Dado que en el mundo no existía otra empresa dedicada a este rubro con la capacidad de procesamiento de litio que tenía la *Lithco*, optar por una licitación internacional, no solo que era desaconsejable desde el punto de vista empresarial sino inútil desde el punto de vista práctico.

Ante esta negativa, COMCIPO decide convocar a una marcha para el 14 de febrero de 1990. La masiva participación de la ciudadanía potosina fue un espaldarazo a la postura de la entidad cívica, lo que se refuerza más cuando la Brigada parlamentaria de Potosí devuelve el borrador de contrato al Consejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (CIRESU), observando que la *Lithco* no puede tener el monopolio de la explotación y comercialización de los recursos del salar (*El Siglo*, 16.02.90).

Ante esta situación, el Gobierno ya debilitado de argumentos y acosado por varios frentes, ensayó una maniobra: ofertó que Potosí perciba el cien por ciento

de los ingresos por explotación del litio que, según sus proyecciones, alcanzaba a los 1.200 millones de dólares en los 40 años del contrato. Uno de los senadores del departamento, Gonzalo Valda, respaldó el anuncio indicando que “ninguna región alcanzó una participación del 100% de la explotación de sus recursos naturales. Los tiempos están cambiando, Potosí lo dio todo durante cuatro siglos y es hora de que se haga justicia”.

Este anuncio hizo nacer el temor de que no fuera bien recibido en otros departamentos ya que, se decía, daba pie a que otras regiones en el futuro pidan lo mismo. Sin embargo el diputado oficialista por Santa Cruz Carlos Dabdoud, (una región donde este tema era particularmente sensible), se encargó de calmar las aguas afirmando que “la figura es otra, Santa Cruz será solidaria con la región potosina” (*El Siglo*, 30.04.1990).

Contra todo pronóstico, esta oferta ni siquiera fue considerada en el seno de la entidad cívica potosinista totalmente volcada a luchar contra el ingreso de la transnacional. Es más, se la consideró una maniobra destinada a desvirtuar el movimiento. Un día después del anuncio gubernamental, COMCIPO lanzó un comunicado que señalaba:

(...) lo del 100% de regalías es una burda maniobra política que a más de confundir a la opinión pública origina un espíritu de malestar en otros distritos del país; pretendiendo ocultar *el verdadero objetivo de nuestro movimiento cívico que de ninguna manera pretende enfrentar los intereses regionales con los nacionales, sino desenmascarar el propósito que tiene el gobierno de entregar nuestro salario a la vorágine de la Lithco* (*El Siglo*, 4.05.1990 resaltado mío).

Este comunicado reflejó, sin ambages, la ideología y el objetivo de COMCIPO en el conflicto, que no era otro que frenar el proyecto de fomento a la inversión extranjera impulsado por el Gobierno de Jaime Paz. Claramente era una resistencia al neoliberalismo, desde el nacionalismo revolucionario, a partir de la agitación de un sentimiento regionalista.

En abril, el Consejo consultivo de COMCIPO decretó huelga general e indefinida, medida que halló respaldo en el Concejo municipal “por ser la demanda enteramente cívica” y también en la numerosa Federación de maestros de Potosí que, pese a un acuerdo sectorial suscrito con el gobierno por esos días, decidió continuar paralizando actividades, esta vez en apoyo a la huelga potosina (*El Siglo*, 27.04.1990).

Pronto la movilización se irradió hasta la ciudad de La Paz donde una organizada y numerosa federación de residentes potosinos, inició una huelga de hambre en rechazo al contrato. Paralelamente, las bancadas legislativas de Izquierda Unida y de Conciencia de Patria mencionaron que rechazarán el Contrato cuando se ponga a consideración del parlamento. Por su parte, el MNR (que encontró en el conflicto una oportunidad política para atacar al gobierno), se sumó a las voces de oposición y señaló, por medio de su portavoz en el congreso Guillermo Bedregal, que su bancada estaba inclinada a rechazar el contrato. Posteriormente, esta pos-

tura, fue ratificada por el jefe del MNR Gonzalo Sánchez de Lozada, que afirmó que “no se debe firmar ese contrato y debe haber negociaciones más razonables. Los recursos del salar deben ser explotados pero no regalados”.

Para aumentar la presión, una delegación de dirigentes de COMCIPO a la cabeza su presidente Facundo Gómez, se traslada a la ciudad de La Paz donde iniciaron una huelga de hambre. Su idea era hacerlo en el Parlamento pero al ser impedidos de ingresar, optaron por hacerlo en el Sindicato de la prensa de La Paz. (*El Siglo*, 30.04.1990).

Luego de ocho días de huelga, la movilización antes que debilitarse se incrementó. La paralización de actividades, junto al bloqueo de caminos se mantuvo, se sumaron seis piquetes de huelga de hambre ubicados en la sede de la COD, en la parroquia de San Pedro y en la Universidad Tomás Frías.

COMCIPO, al prever que el Presidente Paz Zamora no daría un paso atrás en su decisión de suscribir el contrato, incrementó su presión sobre el Parlamento, más propiamente sobre la bancada parlamentaria potosina. El 4 de mayo envía una carta a los parlamentarios potosinos que en un tono imperativo y de amenaza instruye que rechacen el contrato:

respondiendo así al mandato popular manifestado en las marchas multitudinarias del lunes 23 de abril y del 1 se mayo, ratificado en sendos Consejos consultivos del ente cívico. *Caso contrario, declararemos a quienes apoyen la aprobación del contrato, personas traidoras e indeseables a nuestra tierra, determinando que los nacidos en el departamento sean expulsados, junto a toda su familia de nuestro territorio so pena de ser expulsados con ignominia y sin responsabilidad de cuanto pueda sucederles a ellos y sus familias* (*El Siglo*, 4.05.1990 resaltado mío).

Con un conjunto de actores absolutamente radicalizados en torno al rechazo al contrato y sin perspectivas de lograr los dos tercios necesarios (el MNR ya había anunciado el rechazo), para aprobar el contrato en el Congreso, Jaime Paz, en un mensaje a través de los medios de comunicación en la tarde del 6 de mayo, anunció su decisión “muy a pesar suyo” de suspender el contrato con la *Lithco* y acceder a la demanda de COMCIPO de llamar a una Licitación internacional, con lo que se suspendieron todas las medidas de presión en un ambiente festivo y triunfal.

COMCIPO declaró jornada de regocijo para el día siguiente al anuncio. La di-rectiva llegó desde la ciudad de La Paz y, arropada por una multitud que los acompañó desde la terminal de buses hasta la plaza central, procedió a declarar a Potosí como “Capital de la dignidad nacional”, colocando una plaqueta conmemorativa, con ese título, en el Obelisco de la ciudad.

Conclusiones

En primer lugar, se puede afirmar que uno de los clivajes más importantes de la sociedad boliviana es el de Estado-mercado. El mismo aparece, entre 1825 y 1870, en torno al debate sobre el monopolio de la compra de minerales por el Estado y la vigencia de la moneda feble y divide a la sociedad entre proteccionistas y librecambistas. Esta pugna es superada en 1871 con la eliminación del monopolio estatal y la vigencia de la moneda feble, dando paso a la inversión extranjera en la minería y la aparición de una clase empresarial minera (los “patriarcas de la plata”). Este tema reaparece en 1920 de la mano de sectores urbanos, artesanales, obreros y clase media que cuestionan el rol del Estado en la economía y la sociedad dando lugar a la aparición de partidos políticos nacionalistas (MNR) y socialistas (PIR). En 1952, las fuerzas nacionalistas, a la cabeza del MNR, toman el poder, e inauguran un ciclo nacionalista que estatizó las empresas mineras, suprimió las relaciones de servidumbre en el campo y estableció el voto universal. Este ciclo, sufre un quiebre con los gobiernos militares en 1964, que establecen una política de apertura a las inversiones extranjeras tanto en la minería como en el petróleo. Posteriormente, en 1982, con el retorno de la democracia, se instalan en el poder las corrientes políticas nacionalistas que intentan continuar con el modelo estatal de 1952 sin lograrlo; la crisis económica deslegitima tanto el propio modelo económico estatal como las fuerzas que la sostienen, lo que da paso al neoliberalismo que, desde 1985 desnacionaliza las empresas que antes estaban en manos del Estado.

Por otra parte, se puede constatar que la presencia del neoliberalismo en 1985, junto al sistema de partidos, de ninguna manera diluyó el clivaje Estado-mercado. Si bien en el periodo neoliberal apareció con fuerza la temática del mercado, la globalización, la apertura al comercio exterior, como ejes de la modernización del Estado, de la eficiencia y la institucionalidad estatal, de ninguna manera pudo ser tan fuerte como para borrar al nacionalismo. De hecho, mientras los partidos de derecha actuaban bajo el clivaje modernidad -tradicionalismo, creyendo superada la fase nacionalista, en verdad no ocurría nada de esto, el nacionalismo seguía operando en la política boliviana con mucha fuerza, como se puede constatar en el conflicto por el litio potosino.

Los sindicatos y partidos de izquierda, no dejaron de actuar bajo el clivaje Estado-mercado aunque desde instituciones regionalistas. Como vimos en el caso de estudio, COMCIPO, una entidad territorial fundada a propósito de la defensa de los intereses regionales, estuvo dirigida por las fuerzas sindicales y de izquierda, para detener el ingreso de la transnacional *Lithco* en el salar de Uyuni.

En la actualidad, el Gobierno del Movimiento al Socialismo, ha apostado por una explotación estatal de los recursos evaporíticos del salar de Uyuni. Para ello, tiene previsto invertir 900 millones de dólares en plantas de industrialización del cloruro de potasio y de cátodos de litio. Esta medida ha recibido el beneplácito de las organizaciones sociales y cívicas del departamento por lo que no hubo

conflictos en torno a este proyecto. Sin embargo, el tema de cuanto se beneficiará la región con este proyecto, a través de las utilidades que genere, no está claro, lo que puede generar nuevos conflictos regionalistas.

Bibliografía

- Antezana Luis H.
(1983). "Sistema y procesos ideológicos en Bolivia (1935-1979)". En *Bolivia Hoy*, René Zavaleta (Comp.). México: Siglo XXI editores.
- Alessandro, Martín
(2009). "Clivajes sociales, estrategias de los actores y sistema de partidos: la competencia política en la ciudad de Buenos Aires". En revista *SAAP*, N° 3.
- Arze, José Roberto
(2015). *Antología de documentos fundamentales de la historia de Bolivia*. La Paz: Biblioteca del Bicentenario.
- Barnadas, Joseph
(2002). *Diccionario histórico de Bolivia*, Sucre: Grupo de Estudios Históricos.
- Bedregal, Guillermo
(1959). *La nacionalización minera y la responsabilidad del sindicalismo*, La Paz: COMIBOL.
- Burbano de Lara, Felipe
(2014). *La revuelta de las periferias. Movimientos regionales y autonomías políticas en Bolivia y Ecuador*. Quito: FLACSO.
- Chavez, Fernando
(2016). "Hacia una relectura de los clivajes políticos. El kirchnerismo como reconfiguración del clivaje peronismo-antiperonismo". *ABRA, Revista de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad Nacional* N° 53 (1-19).
- Dunkerley, James
(1987). *Rebelión en las venas, la lucha política en Bolivia 1952-1982*. Bolivia: Quipus.
- Francovich, Guillermo
(1980). *Los mitos profundos de Bolivia*. La Paz: Los amigos del libro.
- García Linera, Álvaro
(2014). *La condición obrera en Bolivia*. La Paz: Plural.
- Giménez, Gilberto,
(2012), "El problema de la generalización en los estudios de caso", en *Cultura y representaciones*, Año 7, N° 13, pp. 40-62.
- Iñiguez, Edgar
(2008). *Movimientos regionales, discurso, ideología e identidad*. Sucre: USFX.
- Just, Marco
(2017) *The Origins of Fragmented State Capacity External shocks, sub-national actors and local public services in Bolivia*. A Dissertation submitted to the Department of Social and Political Science of Freie Universität Berlin in Candidacy for the Degree of Doctor rerum politicarum.
- Klein, Herbert
(1982). *Historia de Bolivia*. La Paz: Juventud.
- Kriesi, Hanspeter
(1998). "The transformation of cleavage politics". *European Journal of Political Research* N° 33: 165-185.
- Malloy, James
(1989). *Bolivia: la revolución inconclusa*. Cochabamba: CERES.
- Mitre, Antonio
(1981) *Los patriarcas de la plata*. Lima: IEP.
- Rokkan, Stein y Derek Urwin
(1982). "Introduction: centres and peripheries in Western Europe". En *The politics of territorial identity. Studies in european western regionalism*, Stein Rokken y Derek Urwin (Eds.). Londres: Sage.
- Romero Salvador,
(1999). *Reformas, conflictos y consensos*, La Paz: Fundemos.

- Rodríguez, Gustavo
(2001). "Los mineros de Bolivia en una perspectiva histórica", En *Revista convergencia*, n° 20. Toluca: UAEM.
- Tapia, Luis
(2011). "Clivajes sociales y clivajes políticos (Bolivia)". En Marcos Cueto y Adrian Lerner (eds.), *Desarrollo, desigualdades y conflictos sociales, una perspectiva desde los países andinos*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. (pp. 95-114).
- Torres, Rubén
(2016). "Perspectiva de la teoría de clivajes para el caso latinoamericano". *Cuadernos Americanos* N° 155 (pp.97-115). México.
- Torcal, Mariano y Scott Mainwaring
(2003). "The political recrafting of social bases of party competition: Chile, 1973-95". *British Journal of Political Science*, N° 33 (pp. 55-84).

Hemerografía

- El Siglo* (1975-1990).
Trinchera (1955).
Democracia popular (1958).
La voz del gráfico (1962).
Crítica, la voz del Sumaj Orko (1965).
La Época (1969).

Entrevistas

- Carlos Derpic, expresidente de COMCIPO
Luis Fernández Fagalde, expresidente de COMCIPO
Carlos Aranibar, expresidente de COMCIPO
Manuel Decormis, expresidente de COMCIPO